

PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN

CENTRO JUDICIAL CAPITAL
JUZGADO DEL TRABAJO VI

ACTUACIONES N°: 169/18



H103064306931

JUICIO: GODOY MIGUEL OSVALDO c/ TRANSPORTE AUTOMOTOR CRUZ ALTA S.R.L. s/ COBRO DE PESOS. EXPTE. N° 169/18

San Miguel de Tucumán, 20 de marzo de 2023.

AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia definitiva en la causa del título "GODOY MIGUEL OSVALDO c/ TRANSPORTE AUTOMOTOR CRUZ ALTA S.R.L. s/ COBRO DE PESOS" que tramitó ante este Juzgado del Trabajo de Primera Instancia de la VI Nominación, de cuyo estudio

RESULTA:

Por escrito del 01/03/18 (fs. 08/17) se apersonó la letrada María Gabriela Rosignolo, patrocinada por el Dr. Enrique López Domínguez, en representación del sr. MIGUEL OSVALDO GODOY, DNI n° 22.551.340, domiciliado en calle Delfín Gallo 3080 de esta ciudad y demás constancias personales que obran en poder *ad litem*. En tal carácter interpuso demanda en contra de TRANSPORTE AUTOMOTOR CRUZ ALTA SRL, ubicado en av. Brígido Terán n° 250, oficina 74, Estación terminal de esta ciudad por la suma de \$349.838,20 en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, integración mes de despido, días de suspensión septiembre y octubre/2016, Sac/proporcional 2016, vacaciones proporcionales/2016 y arts. 1 y 2 de la Ley n° 25323.

Inicialmente requirió que, si se produjese un desajuste en la actualización monetaria de los créditos reclamados, se declare inconstitucional el art. 4 de la Ley n° 25561 y se disponga la actualización conforme el índice del costo de vida.

Describió que en marzo de 2008 el actor comenzó a trabajar como "chofer" de transporte de pasajeros de la línea n° 124 y que su tarea se interrumpió en algunos períodos, puntualizando que se desempeñó por 9 meses en 2008, 4 meses en 2009, de enero de 2010 a diciembre 2011 y de enero de 2012 a octubre de 2016. Alegó que su jornada laboral habitualmente excedió las ocho horas diarias y que nunca se le liquidaron horas extraordinarias.

Expuso que en 2016 la empresa comenzó a hostigarlo, requiriéndole continuamente informes y que, aun después de hacerlos, le aplicó suspensiones, por lo que el 26/09/2016 decidió remitir telegramas impugnando. Dijo que la conducta persecutoria se mantuvo hasta que el 11/11/2016 fue despedido.

Por escrito de 31/05/18 amplió demanda debido a que obtuvo documentación que acreditaría la etapa en que trabajó sin registración, la que fue aportada y detallada a f. 149. Al respecto, afirmó que los periodos denunciados totalizarían 7 años y 11 meses (8 años de antigüedad) y que ello surge del certificado de servicios y remuneraciones. De este modo, incluyó el reclamo del art. 1 de la Ley n° 25323 y asentó que su mejor remuneración fue de \$19.749 (noviembre/2016).

Corrido del traslado de demanda, mediante presentación del 04/09/18 (fs. 200/227) se presentó la letrada María Soledad Molina Gaudio, en representación de

TRANSPORTE AUTOMOTOR CRUZ ALTA SRL, con domicilio en av. Brígido Terán 250, boletería 74, Estación Terminal de esta ciudad, quien luego de efectuar la negativa de rito de los hechos invocados, proporcionó su versión.

Admitió que desde el 09/11/2009 el actor se desempeñó para su mandante como chofer de colectivo durante 5 días por semana en jornadas de ocho horas del turno tarde. Aclaró que si bien anteriormente se relacionaron laboralmente entre el 17/03/2008 hasta el 17/04/2009 -dado que recién el 09/11/2009 decidió celebrarse un nuevo contrato de trabajo- aquel periodo está prescripto y la etapa discutida en este proceso sería la comprendida entre el 09/11/09 y el 11/11/16.

Dijo que el 11/11/2016 lo despidieron por comportamientos impropios. Explicó que, por brindar un servicio público, la empresa debe controlar que sus choferes tengan una conducta ejemplar. Por ello, indicó que, antes de desvincular al sr. Godoy, intentaron que adecuara su conducta y desarrollara la tarea de manera diligente y responsable. Aseveró que las suspensiones impuestas se encuentran firmes, pues no efectuó reclamos. Valoró de manera detallada dichas actuaciones disciplinarias y citó doctrina y jurisprudencia que consideró acordes, a lo que me remito en honor a la brevedad y que será analizado oportunamente.

Comunicó que la demandada se encuentra concursada y que el expediente tramita en el Juzgado Civil y Comercial Común de la IV° Nominación; requirió la intervención de la sindicatura actuante. Finalmente, impugnó planilla.

Por escrito del 18/02/19 la parte demandada adjuntó la documentación original que se detalló a f. 296.

Mediante pronunciamiento de fecha 04/11/19 se apersonó al síndico designado en el concurso preventivo, CPN Luis Marcelo Schiavonne.

A través de decreto del 19/02/20 se dispuso la apertura de la causa a pruebas.

El 05/03/21 se celebró la audiencia de conciliación, a la que comparecieron el actor, su apoderada y la mandante de la accionada. Surge de su contenido que se tuvo por intentado el acto conciliatorio y que se suspendieron los términos procesales hasta el 19/03/21 en que se notificaron en oficina los decretos de admisibilidad de las pruebas ofrecidas.

Concluida la etapa probatoria, el 09/06/22 Secretaría actuaria informó a tenor del art. 101 del CPL y precisó el siguiente detalle: Parte actora: 1) Instrumental: producida (fs. 322/323 y actuaciones digitales). 2) Pericial caligráfica: producida (fs. 324/326 y actuaciones digitales). 3) Informativa: producida (fs. 327/329 y actuaciones digitales). 4) Testimonial: parcialmente producida (fs. 330/331 y actuaciones digitales) (incidente de tachas de testigos). 5) Testimonial: parcialmente producida (fs. 332/333 y actuaciones digitales) (incidente de tachas de testigos). 6) Exhibición de documentación: producida (fs. 334/336 y actuaciones digitales). 7) Pericial contable: producida (fs. 337/339 y actuaciones digitales). Parte demandada: 1) Instrumental: producida (fs. 340/341 y actuaciones digitales). 2) Informativa: parcialmente producida (fs. 342/343 y actuaciones digitales). 3) Instrumental-reconocimiento: producida (fs. 344/346 y actuaciones digitales). 4) Testimonial-reconocimiento: producida (fs. 347/349 y actuaciones digitales) (incidente de tacha de testigos: actuaciones digitales). 5) Confesional: sin producir (fs. 350/351 y actuaciones digitales). Por decreto de igual fecha se informó a las partes que la causa se encontraba a su disposición para alegar.

A través de nota del 07/07/22 se informó que ambas partes presentaron alegatos y por decreto de igual fecha se dispuso el pase de los autos a despacho para el dictado de sentencia definitiva. Debido a que se advirtió la inconstitucionalidad deducida por la accionante en su escrito inicial, se remitió la causa al agente fiscal, quien se expidió el 11/11/22.

El 01/12/22 volvió a ordenarse el pase de los autos a despacho para el dictado de sentencia.

CONSIDERANDO:

I. Resultan cuestiones expresamente reconocidas por las partes y, por ende, exentas de pruebas: a) Jornada laboral del actor: mientras el reclamante denunció que, a veces, trabajó más de ocho horas diarias -sin precisar al respecto ni reclamar horas extras-, la accionada dijo que se desempeñó cinco días a la semana y ocho horas diarias. Las versiones coincidentes y la ausencia de reclamos extraordinarios me permiten inferir que el sr. Godoy trabajó de lunes a viernes ocho horas diarias, o sea, cuarenta (40) semanales. b) Fue “chofer de colectivo”, según CCT 460/73. c) Fue despedido por CD del 11/11/16.

II. Sólo se encuentra tácitamente admitida por la parte accionada -en mérito de su silencio, que me habilita a efectivizar el apercibimiento del art. 60 CPL y tener por cierta la versión de la contraria- su remuneración percibida \$19.749, la que usó como base para confeccionar su planilla de rubros.

III. Los extremos controvertidos y de justificación necesaria sobre los que deberé expedirme (art. 214 inc. 5 del CPCC, de aplicación supletoria) son: 1) Respecto de los extremos laborales: fecha de ingreso. Antigüedad. Prescripción. 2) Extinción de la relación laboral: justificación de la causa. 3) Procedencia de los rubros y montos reclamados. 4) Intereses. Planilla de condena. Costas. Honorarios.

PRIMERA CUESTIÓN: fecha de ingreso. Antigüedad. Prescripción.

Fecha de ingreso. Antigüedad:

1. Detalló el actor que originariamente se vinculó a la accionada entre marzo y noviembre de 2008 y entre enero y febrero de 2009. La contraria afirmó que esta primera relación comenzó el 17/03/2008 y finalizó el 17/04/2009, revelando un período más extenso al incluir marzo y abril de 2009. Surge de lo expuesto que la accionada admitió una vinculación más extensa que la invocada por el sr. Godoy, en razón de que incluyó los meses de marzo y abril de 2009.

Coinciden las partes en que por contrato posterior, se unieron entre noviembre/2009 y noviembre/2016.

De estos relatos surge que existieron dos contratos de trabajo que se extendieron entre marzo de 2008 y abril de 2009 y entre noviembre de 2009 y noviembre de 2016. O sea que durante mayo y octubre de 2009 (seis meses) no hubo vinculación.

Vale esta introducción para recalcar que dado que no se reclamó por la primera relación de empleo -de hecho, no emana de la causa cómo se habría extinguido y si habría quedado alguna obligación pendiente-, se indagará la última.

2. Es pertinente señalar que la correcta determinación de la antigüedad de un trabajador tiene injerencia desde el punto de vista laboral y de la seguridad social, ya que le otorga derechos como el cobro de adicionales, mayor plazo de algunas

licencias, importes a devengarse en caso de extinción del contrato de trabajo y el acceso a la jubilación ordinaria, etc.

La antigüedad laboral es el tiempo de servicio efectivo que tiene en su lugar de trabajo desde su ingreso y encuentra regulación en la LCT, que dispone “*Tiempo de servicio. Cuando se concedan derechos al trabajador en función de su antigüedad, se considerará tiempo de servicio el efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación, el que corresponda a los sucesivos contratos a plazo que hubieren celebrado las partes y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador, cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador*” (art. 18).

De ello se colige que cuando las mismas partes hayan celebrado sucesivos contratos, deben tenerse en cuenta todos ellos a los efectos de los derechos del trabajador en función de su antigüedad, que no interesa la causa por la cual concluyó el o los anteriores pues valen todos como si fueran uno solo. O sea que se acumula la antigüedad ganada durante la vinculación previa a la que se genera en la subsiguiente relación, la actividad del trabajador se integra con todo el tiempo, continuo o discontinuo, durante el cual haya estado vinculado por contratos de trabajo con su actual empleador.

3. Entonces, computaré la antigüedad del sr. Godoy sumando el tiempo que efectivamente prestó servicios para el accionado bajo ambos contratos de trabajo. Teniendo en cuenta que el primero se extendió entre el 17/03/2008 y el 17/04/2009 y el segundo entre el 09/11/2009 y el 11/11/2016, su **antigüedad** fue de 8 años, 1 mes y 2 días (art. 18 LCT). Por su parte, la **fecha de ingreso** es aquella que marcó el inicio de la segunda vinculación -que es objeto de estudio en este proceso- es decir el 09/11/2009. Así lo declaro.

Prescripción:

1. La parte accionada expuso que el reclamo por el período 17/03/2008-17/04/2009 se encuentra prescripto y que la relación que debería discutirse es la comprendida entre el 09/11/09 y el 11/11/16.

2. Vale recalcar que el art. 256 de la LCT dispone que los créditos laborales se extinguen por el transcurso de dos años de silencio o inactividad de su titular pudiendo interrumpirse por reclamación administrativa durante su trámite, pero en ningún caso por un plazo mayor de seis meses, sin perjuicio, de las demás causales de interrupción y suspensión previstas en el Código Civil (art. 257 LCT). Es trascendental subrayar que el plazo se computa desde que el crédito existe y puede ser exigido (art. 2554 del Código Civil y Comercial de la Nación-ex art. 3956 del Código Civil, Ley n° 340).

En este sentido, corresponde diferenciar que los rubros derivados de la extinción de la relación laboral son exigibles al vencimiento del cuarto día hábil posterior al despido (conforme lo prescripto en los arts. 128 y 255 bis de la LCT), en tanto los rubros salariales, a partir del vencimiento de los plazos del art. 128 de la LCT, para cada pago mensual de la remuneración.

2. Como fuera explicado en el apartado “fecha de ingreso...” la vinculación de empleo bajo análisis es la segunda, o sea, la que se extendió entre el 09/11/2011 y el 11/11/2016, por lo que la extensión de la primera solo resulta útil para computar la antigüedad del trabajador.

De esta forma, debido a que no se reclamaron prestaciones derivadas de aquel primer contrato de trabajo que unió a las partes, tales como indemnizaciones, diferencias salariales, etc., puedo concluir que se debe rechazar la prescripción planteada, pues no existen reclamos referidos a aquella contratación.

En efecto, los créditos reclamados se tornaron exigibles a partir de la extinción del segundo contrato laboral entre las partes (año 2016), por lo que la demanda se dedujo temporáneamente el 01/03/2018. Así lo declaro.

SEGUNDA CUESTIÓN: justificación de la causa de despido.

1. Coinciden las partes en que el actor fue despedido por CD del 11/11/2016 que en lo pertinente postuló: *“...Comunicamos a ud. que a partir del día de la fecha hacemos denuncia del contrato de trabajo que nos vincula, por su exclusiva culpa, a tenor de lo normado en el art. 242 de la LCT. Causa del presente despido es que el día 21 de octubre de 2016, a hs. 18.55 en Av. Gobernador del Campo y Coronel Suárez, y en la oportunidad que se encontraba a cargo del coche interno n° 66 cumpliendo el servicio n° 7 de la línea 124, el sr. inspector constató que se transportaban a bordo de la unidad dos pasajeros que no habían abonado sus respectivos pasajes. La conducta asumida por ud. denota un claro incumplimiento a sus obligaciones laborales...ocasionando perjuicio económico a esta empleadora. Debemos advertir que su incumplimiento laboral no resiste justificativo alguno...Adviértase que conforme consta en su legajo personal esta patronal...mediante la aplicación de sanciones, pretendió corregir sus reiterados incumplimientos laborales en el presente año, habiendo sumado una cantidad de 26 días de suspensión consentidas y firmes...así: febrero 2016 dos días de suspensión...abril 2016 un día de suspensión...junio 2016 diez días de suspensión...septiembre 2016 2 días de suspensión y cuatro días de suspensión...octubre de 2016 cuatro días de suspensión y dos días más de suspensión...no quedando otra opción que proceder a su desvinculación laboral...”*.

Es claro que la empresa endilgó al sr. Godoy los perjuicios económicos que le habría provocado el traslado ‘gratuito’ de dos pasajeros y ciertos incumplimientos que le valieron 26 días de suspensión durante el último año de vinculación.

2. De manera inicial consideraré lo normado por la LCT respecto del modo de extinción de los contratos de trabajo.

Así, su art. 242 dispone que una de las partes podrá denunciarlo en caso de inobservancia, por parte de la otra, de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que, por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación.

El art. 243 prescribe, por un lado, que tanto el despido por justa causa dispuesto por el empleador, como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funden y, por otra parte, que ante la demanda que promoviere la parte interesada, no se admitirá la modificación de la causal consignada en las epístolas.

Por su lado, la jurisprudencia local sostuvo que la valoración de la injuria debe ser realizada por el juzgador, teniendo en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad, hecho que -para constituir una justa causa de despido- debe revestir una magnitud suficiente para desplazar del primer plano el principio de

conservación del empleo al que hace referencia el art. 10 de la ley de contrato de trabajo. Es decir, el juez debe considerar el carácter de las relaciones que resultan del contrato de trabajo en cuestión, como así también las modalidades y circunstancias personales de cada caso (CSJT, “Ruiz, Lucía Ángela vs. Instituto del Riñón y Diálisis del Sur y/o Moreno, Héctor Antonio s/despido” sentencia n° 579 del 17/08/2010).

Es relevante señalar que la carga de probar incumbe a quien afirma un hecho controvertido, siendo que cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma que invoque como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, de acuerdo a lo prescripto por el art. 322 CPCC, de aplicación supletoria, art. 14 CPL (conf. CSJT, sent. 792/2018, “Serrano vs Soria”). Y que cuando son diversas las causales invocadas para el despido, basta la acreditación de una de ellas, siempre que sea de gravedad o entidad suficiente para justificar la medida extintiva (conf. CSJT, sent. 1058/2006, “Roldán vs Instituto San Pedro”; sent. 468/2012, “Coria vs Libertad”; sent. 372/2006, “Pérez vs Cruz Alta”; sent. 197/2010, “Pons vs Plásticos”; entre otras).

3. Compulsaré detenidamente las versiones plasmadas por los litigantes en sus libelos introductorios y la prueba rendida en la causa para decidir.

La accionada opinó que el actor no reparó en los ‘menoscabos económicos’ que provoca no cobrar boleto a los pasajeros, en el sentido de que si no realiza la apertura de los pasajes y abonos del día, no es posible contabilizar certeramente la recaudación. Que tampoco consideró las ‘alteraciones de programación’ por llegar adelantado o atrasado de un recorrido, circunstancia regulada por la Dirección de Transporte de la provincia de Tucumán y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Le reclamó por no declarar espontáneamente la situación suscitada el 21/10/16, de la que tomó conocimiento a través del inspector de turno.

Por su parte, el actor explicó que cuando en el viaje el inspector Arias le comunicó que un pasajero no había registrado su tarjeta en la máquina de boletos, le respondió que sí lo había hecho y que el costo del boleto del otro pasajero fue soportado por un tercero.

Debo señalar que como parte de su documentación original, la accionada aportó un informe de fecha 21/10/16 (expte. 100/16) por el cual el inspector Arias informó a la gerencia de TA Cruz Alta SRL que en el servicio n°7 directo detectó “2 (dos) pasajero sin boleto y al consultar chofer una pasajera se hizo registrar el pasaje por otro pasajero que ya se había bajado y al otro le hice abonar su boleto”.

Es importante recalcar que en sendas audiencias de reconocimiento el sr. Gil Martín Arias reconoció como de su puño y letra a aquel informe sumarial y el actor admitió que lo suscribió, pero en disconformidad (CPD2 y CPD3, respectivamente).

En suma, la plataforma fáctica en discusión sería la siguiente: mientras el actor afirma que el 21/10/2016 sólo un pasajero subió a su unidad sin abonar boleto -pero que su pago fue asumido por otro viajante-, el accionado sostuvo que dos pasajeros viajaban sin pagar, que el boleto de uno de ellos fue abonado por otro transeúnte y que el otro viajante pagó luego de ser compelido por el inspector Arias al advertir esa omisión. Por lo tanto, está admitido que el precio del pasaje de uno de los pasajeros mencionados en el informe fue pagado por un tercer pasajero que le abonó el traslado, pero está discutido si el otro viajante abonó o no el monto del pasaje.

4. En efecto, sólo el relato del inspector Arias respaldaría que un pasajero no abonó su boleto, pero el mismo no resulta prueba categórica pues actuó en representación de la empresa demandada.

Me detengo a señalar que las pruebas son los medios o instrumentos por los cuales se acreditan hechos y que, eventualmente, llevan a producir la convicción del juez. En esta inteligencia, la testimonial consiste en la declaración representativa que una persona o tercero imparcial que no es parte en el proceso hace ante un juez, con relación a lo que sabe respecto de un hecho pasado que fue percibido por sus sentidos.

Este introito me permite advertir que su rol de supervisor y el vínculo que tuvo con la empresa impiden que goce de condiciones de independencia e imparcialidad en el desahogo de la prueba, pues sus tareas conllevan administración y vigilancia de las metas del negocio. En otras palabras, quien ostente el puesto de supervisor (o inspector) no puede ser considerado como un testigo imparcial de hechos que afecten en forma directa a la empresa, ya que la naturaleza misma de su cargo y la confianza depositada en él, lo obligan de alguna manera a defender los intereses de la compañía para la que labora frente a los conflictos que pudieran suscitarse con sus empleados.

Estimo que esta categoría (inspector) puede asimilarse a otras en las cuales recaen tareas de control de los empleados (tales como gerente de recursos humanos) y que, como sostuvo la Excm. Cámara del Trabajo, “*estuvo interesado en el resultado del pleito a modo personal*” (“Mazzuco Octavio Antonio vs. Minera Alumbrera LTD s/ indemnizaciones” - sent. n° 88 del 21/06/2011), resultando menester recurrir a otro medio probatorio para demostrar lo controvertido.

En definitiva, en aquella oportunidad, el inspector (testigo en esta causa -CPD4, audiencia del 21/7/2021), actuó en representación de la empresa demandada, lo que me permite sostener que su declaración no resulta absolutamente imparcial en este caso, debido a que justificaría su propio accionar el día en cuestión, y que, por hipótesis, declarar lo contrario a lo registrado en aquel informe, podría generarle responsabilidades o sanciones por parte de quien fuera su empleador (demandada) en aquella época y que, según él mismo refiere en dicha audiencia, aún sería su dependiente.

Asimismo, si bien está reconocido que un pasajero abonó el pasaje de otro, no surge de la causa que ello fuera un acto prohibido que le acarrearía responsabilidad al conductor.

En su mérito, teniendo en cuenta que la empresa no aportó reglamento o norma referida a la mecánica de pago a través del sistema de tarjetas, no es posible suponer que el sr. Godoy violó sus deberes laborales permitiendo aquella situación.

De hecho, entiendo que ese pago resultó plenamente válido de acuerdo a los lineamientos de la ley civil relacionada con los “pagos efectuados a favor de terceros” (art. 727 CCCN).

Es por lo expuesto que concluyo que el demandado no acreditó que el 21/10/16 dos pasajeros hayan subido al colectivo dirigido por el sr. Godoy sin abonar el respectivo boleto y que ello lo haya dañado económicamente.

Aunque en la misiva rupturista la firma accionada también invocó el historial disciplinario del accionante para justificar la extinción del contrato de trabajo, puedo anticipar que dichos antecedentes sólo podrían robustecer un despido si se hubiere

acreditado el hecho puntual del incumplimiento desencadenante de aquel, lo que no aconteció en la causa. De este modo, si bien el último párrafo del art. 242 de la LCT confiere al juez la facultad de apreciar la existencia de la injuria, ‘...teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo...y las modalidades y circunstancias personales en cada caso’, lo cierto es que la inexistencia de un hecho grave y actual como desencadenante del despido, determina que los antecedentes disciplinarios del trabajador resulten irrelevantes en el contexto de la causa para fundamentar la decisión rupturista, ya que para que dicho antecedente desfavorable opere como elemento coadyuvante de la decisión final es necesaria la concurrencia de un hecho actual que precipite los acontecimientos, de manera tal que, aunado a la existencia de un historial peyorativo del dependiente, permitiría justificar la denuncia del contrato (“Garbía Luis Jorge c/ Mattina Hermanos S.A. s/ despido”- Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sala/juzgado: V- sent. del 28/12/2020).

5. Es por lo expuesto que concluyo que el despido comunicado por la demandada al actor, por CD del 11/11/2016, devino injustificado. Así lo declaro.

TERCERA CUESTIÓN: Procedencia de los rubros y montos reclamados.

De conformidad a lo establecido en el art. 214 inc. 6 del CPCC, corresponde tratar lo concerniente a los rubros y montos reclamados.

Indemnización por antigüedad, preaviso, integración mes de despido: proceden estos rubros, atento al despido sin justa causa dispuesto por la empleadora (arts. 245, 232 y 233 LCT).

Días de suspensión septiembre y octubre/2016:

1. Debo recalcar que el actor no precisó las sanciones que impugnó y que en la planilla de rubros sólo consignó el monto de su reclamo y bajo el acápite “procedencia de los rubros...” manifestó su rechazo hacia la totalidad de las suspensiones dispuestas por la empleadora durante los meses de septiembre y octubre de 2016 y exigió la devolución de los importes descontados arbitrariamente, sin especificar.

Según la prueba documental arrojada a la causa, las cuatro sanciones de suspensión impuestas al sr. Godoy en esa época fueron impugnadas en tiempo y forma mediante notas y TCL de setiembre/2016, restando analizar su contenido y su legitimidad o justificación.

- N° 091/16: dos días (07/10 al 08/10) por llegar a tarde a su puesto de trabajo el 13/09/16, ocasionando un desajuste en el servicio n° 7 diagramado para el ómnibus n° 33. El reclamante negó los hechos en descargo del 16/09/16.

- N° 090/16: tres días (04/10 al 06/10) por no presentarse en horario en su trabajo el 12/09/16, ocasionando un desajuste del servicio n° 7 del ómnibus 33. El 16/09/16 el actor dijo que no se presentó sin aviso pues le envió un mensaje al inspector de turno para informarle que se encontraba enfermo y sin las condiciones de salud necesarias para cumplir su servicio.

- N° 089/16: cuatro días (30/09 al 03/10) pues se verificó que el 10/09/2016 en club Alderete circuló con 15 minutos de atraso y provocó un desajuste en el servicio n° 7 diagramado para el ómnibus n° 34. Por informe del 16/09/16 el trabajador dijo que en virtud de que los sábados se sacó el servicio “directo”, los choferes se ven obligados a dar una vuelta de mayor extensión para cubrir dicha zona pues no hay recorrido los

sábados a la siesta, siendo lógico que el servicio a su cargo, de “autopista”, se vea retrasado.

- N° 088/16: cuatro días (26/09 al 29/09) por alterar el recorrido del 10/09/16 sin autorización, ocasionando un desajuste del servicio n° 7 diagramado para el ómnibus 34. Por nota del 16/09/16 explicó que desviar el recorrido por el tránsito cortado a raíz de un vehículo particular detenido con el capot levantado.

2. Es pertinente subrayar que la LCT habilita al empleador a aplicar medidas disciplinarias proporcionadas a las faltas o incumplimientos demostrados por el trabajador. Las sanciones pueden aplicarse en el marco ejercicio de la facultad de dirigir y organizar la empresa y apuntan a corregir actitudes impropias del trabajador para el desarrollo de la actividad laboral, en busca de un cambio de actitud que sirva de ejemplo para que otros se abstengan de cometer la misma falta. Puedo mencionar el ‘apercibimiento’ (sin consecuencias en la remuneración del trabajador) y la ‘suspensión’ (libera al dependiente de su obligación de estar a disposición del empleador y a éste del deber de abonar la remuneración). A fin de su impugnación se establece que -dentro del plazo de 30 días corridos de notificada la medida- el trabajador podrá cuestionar su procedencia y su tipo o extensión; vencido dicho término sin objeción, se la tendrá por consentida.

Jurisprudencialmente se sostiene que para el examen de la proporción, legitimidad o justicia de las sanciones disciplinarias, el empleador debe ajustarse a los parámetros establecidos para la máxima sanción reglamentada por la LCT, cual es el despido. O sea que, de manera analógica, deben valorarse a la luz de lo dispuesto por los arts. 242 y 243 LCT, siendo ésta última norma la que contiene la obligación del sancionador de detallar con precisión los hechos que sustentan su decisión. Tales requisitos formales de individualización y especificación en forma clara y suficiente eran necesarios -y de cumplimiento obligatorio para la demandada- para definir si realmente existieron los hechos imputados, si las sanciones fueron justificadas y con entidad suficiente para derivar en un despido posterior. Es fundamental resguardar el derecho de defensa del trabajador (art. 18 Constitución Nacional) y su posibilidad de efectivo ejercicio al conocer puntualmente cuales son las injurias en las que se funda el castigo, al igual que abreva en el principio de buena fe contractual (art. 63 LCT) y también hace a la invariabilidad de la causal de denuncia del contrato de trabajo.

Del mismo modo, corresponde reiterar lo plasmado al analizar el despido, respecto de que la carga de probar incumbe a quien afirma un hecho controvertido - en este caso la empresa demandada- de acuerdo a lo prescripto por el art. 322 CPCC, de aplicación supletoria, art. 14 CPL (conf. CSJT, sent. 792/2018, “Serrano vs Soria”).

En este mismo sentido y para valorar la legitimidad de las sanciones disciplinarias, también la Cámara de Fuero Laboral local ha considerado que la carga de la prueba recae en cabeza del empleador (conf. Cámara del Trabajo, Sala 4, sentencia N° 60 del 15/05/2009, “Chambila Vélez vs Disco SA”).

3. Ahora bien, la demandada, en ninguna de la sanciones impuestas explicó cuál habría sido el desajuste que habría provocado el señor Godoy en los servicios que tuvo asignados (n° 88, 89, 90 y 91).

Con respecto a las faltas n° 88, 89 y 90 puedo aseverar que no obra en la causa material probatorio alguno que revele los recorridos de cada línea de colectivo o los

tiempos en que deben cumplirse, así como tampoco las conductas que los choferes deben seguir en caso de variables en el curso normal de sus recorridos. Esto me impide conocer si realmente existió un atraso -y que éste provocara grandes perjuicios para la empresa- o que se hubiera violado alguna norma propia de la empresa o general del Estado. Según mi experiencia común (art. 127 CPCC), las decisiones tomadas por el chofer el 10/09/2016 resultaron acertadas, pues no es ilógico pensar que pueda demorarse por cubrir un recorrido más amplio ante la reducción -por parte de la patronal- de algunos servicios, así como tampoco variarlo si un vehículo dañado obstaculiza el tránsito normal.

Del mismo modo, resulta insostenible una sanción por ausentarse de su trabajo por encontrarse enfermo. En el peor de los casos, si esta fue una licencia injustificada, sólo cabía descontarle el sueldo de ese día y no suspenderlo por tres días (nº 90).

En mérito de lo expuesto y dada la falta de armonía entre las sanciones y el marco legal que debió guiar su correcta aplicación, puedo concluir que resultaron arbitrarias, por lo que el actor es acreedor de los montos dinerarios reclamados por esos 13 días. Así lo declaro.

Sac/proporcional 2016: corresponde admitir la pretensión de este rubro por no estar acreditado su pago (art. 121-123 LCT).

Vacaciones proporcionales/2016: el actor tiene derecho a este rubro de conformidad con lo dispuesto por el art. 156 de la LCT.

Art. 1 de la Ley nº 25323: Jurisprudencialmente se sostiene que, el deficiente registro laboral previsto en el art. 1 de la Ley Nº 25323, debe referirse exclusivamente a las situaciones contempladas en los arts. 8, 9 y 10 de la Ley Nº 24013, es decir: a) ante la falta total de registración de la relación laboral; b) cuando la falta de registración involucre una posdatación en la fecha de ingreso y c) cuando se hubiera consignado en la documentación laboral una remuneración menor a la percibida por el trabajador (cfr. CSJT- Sala Laboral y Contencioso Administrativo en autos “Toro José Alejandro c/ Bayton S.A. y otro s/ Cobro de pesos”, sentencia nro. 472 de fecha 30/06/10).

En el caso de autos, tal como se consideró, existió falta total de registración de la vinculación laboral, por lo que corresponde admitir esta pretensión.

Como fuera anticipado en la ‘primera cuestión’, la primera parte de la relación no es parte del asunto de fondo de este proceso -puesto que sólo sirvió para calcular la antigüedad del actor-, por lo que no cabe considerarla ‘no registrada’, entonces, no se configuró el supuesto sancionado por la norma y, por ello, corresponde el rechazo de este rubro reclamado. En esta inteligencia, estimo aplicable lo decidido por la CSJT en un caso análogo en el que decidió: “...Lo expuesto torna improcedentes las indemnizaciones previstas en los arts. 9 y 15 de la ley 24.013 pues, como dije, no ha existido una deficiente registración de la relación laboral ya que Nicolás H. Robbio S.A. procedió correctamente a registrar a su empleado a partir de la fecha en que éste inició realmente (no falsamente) su vinculación con ella. En ese sentido, ha dicho la jurisprudencia que el trabajador transferido conserva la antigüedad anterior y los derechos que de ella se derivan; sin embargo, el adquirente cumple con su carga registral si inscribe al empleado en el libro especial desde la fecha en que comenzó a trabajar para él, ya que no existe ninguna norma que obligue a anotarlo con una fecha ficta, lo que importaría falsedad de los asientos susceptible de ser sancionada (CNAT,

Sala VIII, 10/4/2003, 'Vitale Cristián V. c/Maco Transportadora de Causales S.A.', JA 2003-IV, sínt.; misma Sala, 'Ribao Noguerol, Emilio c/Seslo SRT y otros s/ Despido', citados por Guisado Héctor en Tratado de Derecho del Trabajo dirigido por Ackerman Mario, Tomo 3, capítulo XIII, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, pág. 781). Reconocimiento de antigüedad por un posterior patrono no equivale a ingreso al trabajo para este último desde una fecha en la que este no formaba parte del contrato" (CNAT, Sala V, "López, Héctor Armando c. Nicolás H. Robbio S.A. y otros s/ Despido", sent. del 14/6/2011, AR/JUR/32715/2011). En el mismo sentido, se resolvió que "Es también improcedente el agravio por la multa del artículo 1º Ley 25.323. El supuesto que prevé el artículo 225 L.C.T., si bien implica el reconocimiento de la antigüedad a todos los efectos para los cuales es relevante, no incluye la inscripción de la fecha de ingreso anterior al acto de transferencia del establecimiento, durante el cual la demandada no revistió el carácter de empleadora. En los asientos del registro del artículo 52 L.C.T., el cesionario nunca podría registrar válidamente circunstancias anteriores a la transferencia, ya que ello importaría la falsedad en los asientos, susceptibles de sanciones" (CNAT, Sala VIII, "Verón, Atilio c. Estación Lima S.A.", sentencia del 16/7/2010, AR/JUR/42271/2010)..." ("Cantos Alberto Daniel c/ El Molino gastronomía SRL s/ cobro de pesos s/ x - instancia única", sent. n° 739 del 14/05/2019).

Art. 2 de la Ley n° 25323: Esta norma, en lo pertinente, dispone que cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la Ley n° 20744 (texto ordenado en 1976) y los artículos 6º y 7º de la Ley n° 25013, o las que en el futuro las reemplacen, y, consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o de cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibir las, éstas serán incrementadas en un 50%. Para la procedencia del incremento indemnizatorio es preciso que el trabajador curse una intimación fehaciente al empleador moroso, a los efectos de otorgarle una última oportunidad para que éste adecue su conducta a las disposiciones legales, bajo apercibimiento de lo dispuesto en la norma analizada, vencido el plazo de cuatro días desde la extinción de la relación laboral (cfr. criterio sostenido por la CSJT, sent. 1433 del 21/11/2016 en "Gómez Pablo Daniel vs. Tiburcio Sanz S.A."). Asimismo, debe tenerse presente que la mora del empleador en el pago de las indemnizaciones se produce luego de transcurridos los cuatro días hábiles de producida la extinción del vínculo laboral, según se desprende del juego armónico de los arts. 128, 149 y 255 bis de la LCT. Así entonces, la intimación exigida por la norma para que proceda el incremento indemnizatorio establecido en el art. 2º de la Ley N° 25323, debe ser efectuada luego de vencido el plazo de cuatro días hábiles de producida la extinción del vínculo, oportunidad en que recién el empleador se encuentra en mora.

Esta intimación fue efectuada por la parte actora mediante TCL del 28/12/2016, no impugnado en su autenticidad y recepción por la contraria (art. 60 CPL) y contestado mediante CD del 02/01/2017, por lo cual prospera este reclamo.

II. 1. El actor solicitó el reajuste o actualización monetaria del capital reclamado con los índices correspondientes, atento la derogación parcial de la Ley N° 23928 y la eventualidad de una escala inflacionaria que pulverice el valor del signo monetario.

Solicitó que solamente en el supuesto de qué se produjese dicho desajuste, se declare la inconstitucionalidad del artículo cuatro de la Ley N° 25561.

2. Debo decir que la vigencia constitucional de ciertas normas sólo puede ser materia de examen y pronunciamiento cuando éstas configuran una cuestión de aplicación concreta, no siendo suficiente la existencia de un juicio en que se peticiona su descalificación sino que -para expedirme sobre la inconstitucionalidad de una norma emanada de otro Poder- la pertinente controversia debe constituir la cuestión de cuya solución depende, en modo exclusivo y determinante, la fundabilidad de la pretensión demandada. En este sentido, no debe perderse de vista que la declaración de inconstitucionalidad de una regla es una decisión extrema y excepcional, que debe ser dispuesta por el órgano judicial con criterio restrictivo, previo a haber realizado todos los esfuerzos hermenéuticos para dotar a la misma de una interpretación que privilegie su validez y armonice con los principios consagrados por la Carta Magna.

Existe arraigada doctrina sobre el tema, según la cual la declaración de inconstitucionalidad de una ley constituye la más delicada dentro de las funciones que cabe encomendar a un tribunal de justicia. Es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado la última ratio del orden jurídico, por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho constitucional invocado (fallos: 328:4542, 327:831 entre otros), siendo relevante destacar que en numerosos pronunciamientos el Cíbero Tribunal ha exhortado a los tribunales inferiores a proceder con prudencia, extremando los recaudos para efectuar una interpretación que, resguardando el mandato constituyente, compatibilice la norma infraconstitucional impugnada con el derecho federal invocado (CSJN en “Fernández, Carlos y otros s/ causa 9510”, sentencia de fecha 20/10/2015).

3. Corresponde ahora señalar que el art. 276 de la Ley n° 20744 o LCT (de fecha 13/05/1976) establece un mecanismo de actualización por depreciación monetaria, que tiene en cuenta la variación que experimente el índice de los precios al consumidor en la Capital Federal, desde la fecha en que debieron haberse abonado hasta el momento del efectivo pago. Esta norma resulta incompatible con los art. 7 (“...en ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley”) y 10 (“Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar”) de la Ley de Convertibilidad N° 23928 (modificados por el art. 4° de la Ley N° 25561, respecto del cual se pretende su declaración de inconstitucionalidad), pues ésta fue promulgada el 27/03/1991, o sea, con posterioridad al dictado de la LCT, derogando, tácitamente, la aplicabilidad de su art. 276.

Cabe agregar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los planteos de inconstitucionalidad de dichas normas a partir de considerar que la solución legal constituye una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el art. 75, inc. 11 de la Constitución Nacional de 'hacer sellar la moneda, fijar su valor y el de las extranjeras...' y la ventaja, acierto o desacierto de la medida legislativa escapan al control de constitucionalidad, pues, la conveniencia del criterio elegido por el legislador no está sujeta a revisión judicial. En especial indicó que dicha decisión del Poder Legislativo tiene un objetivo antiinflacionario (CSJN, "Chiara Díaz Carlos vs Estado Provincial -Provincia de Entre Ríos-", del 7/3/2006 y en "Massolo, Alberto José vs. Transporte del Tejar S.A.", de fecha 20 de abril de 2010, en Fallos 333:447). En dichos precedentes, el Máximo Tribunal de la Nación confirmó la constitucionalidad del art. 4 de la Ley n° 25561, modificatorio de los arts. 7 y 10 de la Ley N° 23928, que prohíbe la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor.

Con igual criterio resolvió nuestra CSJT en el proceso "Todo Construcciones SRL vs. Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano s/ Nulidad/revocación" (sent. n° 1193 del 22/08/2017).

4. En virtud de lo indicado, en especial teniendo en cuenta los precedentes de los Tribunales Superiores, a los que -tal como se indicó con anterioridad en esta misma sentencia- los tribunales inferiores debemos adecuar nuestras decisiones (conf. CSJT, "Albornoz Estela vs Grafa", sent. 158/1996; "Pires vs Asociart", sent. 1086/2019; "Bravo vs Los Pumas", sent. 686/17; "Morales vs Club Atlético Tucumán", sent. 426/2018; entre otras), corresponde rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley N° 25561 (modificatoria de la ley de convertibilidad). Así lo declaro.

BASE DE CÁLCULO:

Se tomará como base de cálculo de los rubros declarados procedentes la mejor remuneración (MRNH) percibida por la reclamante: \$19.749. Así lo declaro.

INTERESES:

1. Los importes que progresan devengarán intereses desde que son debidos y hasta su efectivo pago (art.128 y 149 LCT). Para su cómputo se aplicará la doctrina judicial establecida por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán en la causa "Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones (sentencia N° 1422 de fecha 23/12/15) donde ratifica su decisión de abandonar el criterio anterior de la aplicación de la tasa pasiva promedio del B.N.A. y más recientemente, en la causa "Bravo José Armando vs. Los Pumas S.R.L. s/ Indemnizaciones" (sentencia n° 686 de fecha 01/06/17) en la que sostuvo: *"En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago"*.

Para así decidir el Máximo Tribunal Provincial tuvo en consideración que el trabajador es sujeto de preferente tutela constitucional (art. 14 CN) y su crédito reviste naturaleza alimentaria; además de ello tuvo en cuenta la función resarcitoria de los

intereses moratorios y la profunda vinculación entre la tasa de interés y la depreciación monetaria en las circunstancias económicas actuales.

Asimismo, en este pronunciamiento destacó la función relevante de la casación como unificadora de la jurisprudencia aclarando que *“El cambio de la tasa de interés aplicable a los créditos laborales lejos está de configurar una solución “única”, “universal” o “permanente” ya que el criterio propiciado “no resulta portador de una verdad absoluta y eterna, sino que por el contrario, conlleva la realización de un juicio histórico, basado en circunstancias económicas, sociales, sociológicas y jurídicas que se verifican en este momento, dejando a salvo que no es imposible, sino probable, que en otro momento a tenor de un cambio sustancial de las actuales circunstancias, esta Corte podrá revisar el criterio que hoy se establece en materia de intereses moratorios en los créditos laborales en ejercicio de la relevante función nomofiláctica que es privativa de la casación”*.

2. Ahora bien, es dable reconocer que en el presente caso se ha producido una notable vulneración de la integridad del crédito alimenticio del trabajador (principio de intangibilidad retributiva, conf. arts. 14 bis de la Constitución Nacional, 120, 131, 137, 149, 208 y ccdtes. de la LCT) y, en consecuencia, de su derecho de propiedad (art. 14 CN), por lo que cabe determinar qué tasa de interés deberá aplicarse para mantener la intangibilidad de ese crédito, tal como lo estableció el precedente jurisprudencial antes mencionado.

En efecto, aplicando un promedio de la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días a todos los rubros declarados procedentes desde la fecha en que se produjo el distracto y hasta la actualidad (marzo/2023), el incremento del crédito de los trabajadores ascendería a 284,21%, mientras que el índice de precios del consumidor (en adelante IPC) registró en igual período una variación del 1194,78% y el salario mínimo vital y móvil (en adelante SMVM) una variación de 896,00%. O sea, tanto el IPC como el SMVM superaron notablemente la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a 30 días, por lo que ineludiblemente la aplicación de la simple tasa activa resulta insuficiente y no equivaldría a un justo resarcimiento ante el proceso inflacionario actual. Por lo visto, se corrobora que, en este caso particular, existe una evidente y desproporcionada disminución del crédito laboral de los accionantes por efecto de la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de la mora en el pago de sus créditos por la parte demandada.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que corresponde a los tribunales inferiores adaptar sus decisiones a los precedentes dictados por la CSJT y de la CSJN como Máximos Tribunales, en orden a que pudieren prevalecer criterios de igualdad ante la ley y seguridad jurídica, y en función de lo previsto en el art. 768 del CCCN, a los efectos del cálculo de intereses de los montos de condena, se multiplicará la tasa activa aplicable. En consecuencia, al momento del cálculo de intereses final se aplicará TRES VECES la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento a 30 días a todos los rubros declarados procedentes. Sin perjuicio de ello, cabe aclarar que en caso de que en la etapa de cumplimiento de sentencia corresponda aplicar el art. 770 CCCN (anatocismo), se aplicará sobre el monto de condena actualizado solo una vez la tasa activa. Así lo declaro.

En este sentido, nuestro Máximo Tribunal Provincial tiene dicho que “los magistrados deben quedar en libertad para estudiar y resolver en cada causa en las que intervengan, cuál es la tasa aplicable para dar una respuesta apropiada a la justicia del caso concreto y a la realidad económica, de la cual los jueces no deben encontrarse abstraídos. Es que la razonabilidad de los criterios judiciales en materia de tasa de interés judicial puede entrar en una crisis cuando se suprime al magistrado la facultad de aplicar las normas en forma flexible de modo de acercar la solución más justa al caso concreto...la discrecionalidad del Juez tiene mayor amplitud, libertad y posibilidades para encontrar parámetros en la determinación final de la misma y su adecuación a las circunstancias del caso...corresponde dejar librado a la prudente apreciación de los jueces de mérito de la causa la aplicación de una tasa que, conforme las circunstancias comprobadas del caso, cumpla la función de otorgar un razonable interés al capital de origen, reservándose esta Corte el control último de razonabilidad en dicha apreciación...” (cf. CSJT, “Olivares Roberto Domingo vs. Michavila Carlos Armando y otro s/ daños y perjuicios”, sent. N°937 del 23/09/2014; CAT, Sala 1, “Lazarte María Graciela del Valle vs Aegis Argentina SA s/cobro de pesos”, sent N°30 del 16/05/2022).

En igual dirección, comparto el criterio adoptado por el voto concurrente del Dr. Petracci en el considerando n° 20 del fallo “Massolo, Alberto Jorge c/ Transporte del Tejar S.A” dictado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en fecha 20/04/2010, en el que textualmente se dejó dicho: “Que, sin perjuicio de lo expresado, no puede dejar de señalarse que tanto el Tribunal (conf. Fallos: 315:158, 992 y 1209) como la doctrina especializada han reconocido en la tasa de interés un remedio para dicha situación, lo que deberá ser también evaluado por los jueces de la causa como una alternativa para evitar que los efectos de la depreciación monetaria que tuvo lugar durante la crisis económica y financiera, incidan solamente sobre quien fue la víctima del daño, tema para el cual los magistrados deben ponderar los antecedentes del caso y las circunstancias económicas del momento para determinar con criterio prudencial el interés aplicable”.

Asimismo, no debe perderse de vista que la consideración de la tasa activa como un piso mínimo para los créditos laborales, con posibilidad de aumentar la misma según la situación imperante al momento del dictado de la sentencia, ha sido receptada también desde la doctrina. Así Julio Armando Grisolia propone “establecer para los créditos laborales la aplicación de la tasa activa del Banco Nación para préstamos. Esta tasa actuaría como la mínima que los jueces podrían aplicar, sin perjuicio de la posibilidad de imponer una mayor. Podría tratarse de una modificación del art. 276 LCT o una nueva norma. La tasa activa del Banco de la Nación Argentina equivale, al menos aproximadamente, al costo que el acreedor impago debería afrontar para obtener, en el momento del vencimiento de la obligación, el monto que el deudor moroso hubiese retenido, a la vez que pone en cabeza del deudor la responsabilidad por el resarcimiento de aquel costo, sea este real o equivalente en términos de postergación de consumos o privaciones en que el acreedor hubiese debido incurrir para hacer frente a la falta de pago oportuno de su crédito” y también que: “la tasa de interés aplicable estaría unificada en todo el país, dejando a salvo la discrecionalidad de los jueces para aplicar un porcentual mayor de considerarlo prudente. Es decir que

la nueva norma que debería sancionarse actuaría como un piso mínimo y serviría de orden público laboral en la materia: sería una forma más de hacer previsible para todos los actores sociales el costo real del despido (Grisolía Julio A. “La tasa de interés aplicable en las sentencias laborales”, La Ley 05/5/2014, pág. 3) (cf. CAT, Sala 6, “González José Fernando vs Status SRL, sent. N°93 del 28/05/2019).

3. En síntesis, la tasa de interés se aplica concretamente para resguardar el contenido del crédito adeudado y con el único objeto de mantener la estricta igualdad de la prestación debida conforme las circunstancias de cada caso (cf. CSJN, “Vieytes de Fernández-Suc- vs. Provincia de Buenos Aires”, Fallos 295:973) (cf. CAT, Sala 6, “Jiménez Ricket Fimma Macarena vs Bustos Mercedes Eliana s/cobro de pesos, sent. N°150 del 20/10/2021) debiendo ser incrementada cuando el contexto socio económico en el que se dicta sentencia impone la necesidad de evitar que el crédito del trabajador sufra los efectos de la depreciación monetaria.

Por último, cabe destacar que la decisión de incrementar la tasa activa en virtud de los parámetros previamente expuestos, se ha convertido en el criterio mayoritario en el fuero laboral local (cf. CAT, Sala 6, “González José Fernando vs Status SRL, sent. N°93 del 28/05/2019; Sala 1, “Lazarte María Graciela del Valle vs Aegis Argentina SA s/cobro de pesos”, sent N°30 del 16/05/2022; Sala 6, “Jiménez Ricket Fimma Macarena vs Bustos Mercedes Eliana s/cobro de pesos, sent. N°150 del 20/10/2021; entre otros). Así lo declaro.

PLANILLA DE CONDENA:

Ingreso	17/03/2008
Egreso	17/04/09
Ingreso	09/11/09
Egreso	11/11/16
Antigüedad total	8 años 1 mes y 2 dos dias

Categoría: chofer de colectivo conforme CCT 460/73

<u>MRNyH</u>	\$ 19.749,00
Total	<div><div>\$ 19.749,00</div></div>

<u>1) Indemnización por antigüedad</u>	
\$ 19.749,00X 8 años	\$ 157.992,00
<u>2) Indemnización sustitutiva del preaviso</u>	
\$ 19.749,00X 2 meses	\$ 39.498,00
<u>3) Integración mes de despido</u>	
\$ 19.749,00/ 30 x 19 días	\$ 12.507,70
<u>4) Haberes Dias suspendido</u>	
\$ 19.749,00/ 30 x 13 días	\$ 8.557,90
<u>5) Vacaciones proporcionales 2016</u>	
\$ 19.749,00/ 25 x (21*311/360)	\$ 14.331,19
<u>6) SAC 2° 2016</u>	
\$ 19.749,00/ 2 x 131/180	\$ 7.186,44
<u>7) Art. 2 Ley 25.323</u>	
(\$177.741+\$39.498+\$12.507,70)x50%	<u>\$104.998,85</u>

Total Rubros 1) al 7) \$ al 18/11/2016		\$ 345.072,08
Interés tasa activa BNA desde 18/11/2016 al 16/03/2023	852,63%	\$ 2.942.188,10
incrementado tres veces (284,21%x3)		
Total Rubros 1) al 7) \$ al 16/03/2023		\$ 3.287.260,18

COSTAS:

Atento a que en el proceso se admitieron todas las cuestiones principales y se rechazó sólo un rubro accesorio (art. 1 Ley n° 25323), en virtud del principio objetivo de derrota que impera en el fuero laboral, corresponde imponer la totalidad de las costas a la empresa demandada (art. 61 CPCC, art. 14 CPL). Así lo declaro.

HONORARIOS:

Atento al resultado arribado en la litis y a la naturaleza de la acción, es de aplicación el art. 50 inc. 1 de la ley citada, por lo que se toma como base regulatoria el monto del capital de condena actualizado, el que según planilla precedente resulta al 16/03/2023 la suma de \$3.287.260,18.

Habiéndose determinado la base regulatoria y teniendo en cuenta la calidad jurídica de la labor profesional desarrollada por los profesionales, el éxito obtenido y lo dispuesto por los arts. 15, 39, 42 y concordantes de la Ley 5480, con los topes y demás pautas impuestas por la Ley n° 24432, ratificada por la ley provincial N° 6715, se regulan los siguientes honorarios:

1) Por el actor se apersonó la Dra. Gabriela Rosignolo como apoderada, con el patrocinio del letrado Enrique López Domínguez, quienes interpusieron demanda. La Dra. asistió a audiencia de conciliación y, en la etapa de prueba, a las testimoniales CPA4/5 y CPD4 y reconocimiento del CPD3 y presentó alegatos.

Sus honorarios serán prorrateados de acuerdo a las etapas cumplidas por cada una y al carácter de su intervención (art. 12 LH).

a) Dra. Gabriela Rosignolo: valoro apropiado regularle el 15% de la base regulatoria, por su actuación sólo como apoderada durante una etapa del proceso principal (interposición de demanda), lo que arrojaría la suma de \$90.399,65. Como esta suma supera el tope previsto en el art. 1 de la Ley n° 24432, corresponde su reducción por aplicación del coeficiente del 0,9152%, por lo que se fijan en **\$82.733,06**.

Por su actuación en el doble carácter a lo largo de las dos restantes etapas del proceso le cabría el 17% con más el 55%, es decir, \$577.462,04, pero por el tope de la Ley n° 24432 se redicen a **\$528.488,75**.

Por la incidencia de CPD3: **\$84.071,68** (base x 11% (art. 38) x 15% (art 59) + 55%). Por la nulidad CPD5: **\$68.785,92** (base x 9% x 15% + 55%).

b) Dr. Enrique López Domínguez: es justo regularle el 15% de la base regulatoria, por su actuación como patrocinante durante una etapa del proceso principal, lo que arrojaría la suma de \$164.363,01. Como esta suma supera el tope previsto en el art. 1 de la Ley n° 24432, corresponde su reducción por aplicación del coeficiente del 0,9152%, por lo que se fijan en **\$150.423,74**.

2) La letrada Soledad Molina Gaudio intervino como apoderada de la empresa. Asistió a audiencia de conciliación y, en etapa de pruebas, a las testimoniales CPA4/5 y CPD4 y reconocimiento de CPD3. Presentó alegatos.

Considero justo regularle el 10% con más el 55% de la base regulatoria, por su actuación en el doble carácter a lo largo de las tres etapas del proceso principal, lo que

arroja la suma de **\$509.525,33**. Por la incidencia de CPD3: **\$61.143,04** (base x 8% (art. 38) x 15% (art 59) + 55%). Por la nulidad CPD5: **\$99.357,44** (base x 13% x 15% + 55%).

3) El perito CPN Héctor Luis Azcoaga es acreedor del 2% de la base, es decir, \$65.745,20. También corresponde su reducción pues su monto supera el tope de la Ley n° 24432, resultando **\$60.169,50**.

Por lo expuesto,

RESUELVO:

I. ADMITIR PARCIALMENTE LA DEMANDA promovida por el sr. MIGUEL OSVALDO GODOY, DNI n° 22.551.340, domiciliado en calle Delfín Gallo 3080 de esta ciudad en contra de TRANSPORTE AUTOMOTOR CRUZ ALTA SRL, ubicado en av. Brígido Terán n° 250, oficina 74, Estación Terminal de esta ciudad. En consecuencia, se condena a la empresa al pago total de **\$3.569.462,53 (pesos tres millones quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y dos con 53/100)** en concepto de indemnización por antigüedad, preaviso, integración mes de despido, 13 días de suspensión septiembre y octubre/2016, Sac/proporcional 2016, vacaciones proporcionales/2016 y art. 2 de la Ley n° 25323, conforme lo tratado.

II. ABSOLVER AL DEMANDADO del pago de lo reclamado por art. 1 de la Ley n° 25323, según lo valorado.

III. COSTAS: a la demandada.

IV. REGULAR HONORARIOS: 1) Dra. Gabriela Rosignolo: como apoderada durante una etapa del proceso principal: \$82.733,06. Por el doble carácter: \$528.488,75. Por la incidencia de CPD3: \$84.071,68 y por la de CPD5: \$68.785,92. 2) Dr. Enrique López Domínguez: \$150.423,74 por el principal. 3) Dra. Soledad Molina Gaudio: \$509.525,33 por el principal. Por la incidencia de CPD3: \$61.143,04 y por la de CPD5: \$99.357,44. 4) Perito CPN Héctor Luis Azcoaga: \$60.169,50, según lo analizado.

V. PLANILLA FISCAL: Oportunamente practíquese y repóngase (art. 13 de la Ley n° 6204).

VI. COMUNICAR a la Caja de Previsión y Seguridad Social para Abogados y Procuradores de Tucumán.

VII. NOTIFÍQUESE la presente resolución por derecho propio a los letrados intervinientes en los casilleros oportunamente denunciados.

REGÍSTRESE, ARCHÍVESE Y HÁGASE SABER..REL

LEONARDO ANDRES TOSCANO
Juez
Juzgado del Trabajo de VIª Nominación